



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/C.12/1997/SR.8
4 de julio de 1997

ESPAÑOL
Original: FRANCES

COMITE DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

16º período de sesiones

ACTA RESUMIDA DE LA OCTAVA SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
el viernes 2 de mayo de 1997, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. ALSTON

SUMARIO

Examen de los informes:

- a) Informes presentados por los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto

Informe inicial de Zimbabwe

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

GE.97-16360 (S)

Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

EXAMEN DE LOS INFORMES:

- a) INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 16 Y 17 DEL PACTO (tema 7 del programa)

Informe inicial de Zimbabwe (E/1990/5/Add.28; HR1/CORE.1/Add.55; E/C.12/Q/ZIM.1)

1. Por invitación del Presidente, el Sr. Chifamba, el Sr. Zavazaya y el Sr. Chikorowondo (Zimbabwe) toman asiento como participantes a la mesa del Comité.

2. El Sr. CHIFANBA (Zimbabwe) dice que se han realizado enormes progresos en la aplicación de las disposiciones del Pacto. El número de centros de enseñanza primaria y secundaria ha aumentado considerablemente, lo que ha permitido un aumento importante del índice de escolarización y, por consiguiente, de alfabetización de la población. Se han abierto numerosos centros de enseñanza superior. Actualmente el país cuenta con cinco universidades, y en 1980 sólo había una. Se han construido nuevas escuelas para que ningún niño se encuentre a más de 6 km de un centro de enseñanza.

3. En la esfera de la salud, se han construido nuevas clínicas y hospitales y se ha formado a personal sanitario. Se han tomado medidas para que todas las clases sociales tengan acceso a la atención médica y todas las personas tengan un techo. En la esfera del trabajo y de los derechos de la mujer, del niño y de las minorías se está elaborando nueva legislación para garantizar a todos el ejercicio pleno de sus derechos. Debido a la mundialización de la economía, el país ha debido introducir algunos cambios en su sistema económico, lo que dio como resultado el establecimiento, en 1990, del Programa de Ajuste Estructural Económico, cuyos efectos han sido, por lo general, beneficiosos, especialmente para la agricultura, cuya producción se ha incrementado, y para los precios de los productos, que han aumentado. Con la ayuda del Gobierno, el potencial económico del país, ha permitido diversificar la producción nacional, lo que permite augurar un futuro prometedor.

4. No obstante, Zimbabwe tropieza con algunas dificultades que obstaculizan la aplicación efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales. El Programa de Ajuste Estructural tuvo repercusiones negativas a medio plazo en varios sectores, por lo que algunas empresas tuvieron que cerrar y despedir a sus empleados. Las personas que pierden su empleo reciben una ayuda para reciclarse y suelen encontrar trabajo en el sector no estructurado de la economía, por lo que el número de personas en dicho sector ha aumentado considerablemente. Las que no consiguen volver a encontrar empleo pueden beneficiarse de la ayuda del Estado, que ha instaurado para ello el Fondo de dimensiones sociales.

5. En la esfera de la salud y de la educación se han adoptado medidas de reajuste para que los habitantes de las zonas rurales, en las que vive la gran mayoría de la población tengan siempre acceso a la enseñanza primaria y a la atención médica. Los habitantes de las zonas urbanas pagan una pequeña

contribución por dichos servicios. Las familias que no disponen de medios suficientes para hacer frente a esta situación, reciben ayuda del Gobierno.

6. La grave sequía que sufrió el país en 1991-1992 fue otro de los obstáculos que entorpecieron considerablemente la aplicación de las disposiciones del Pacto. La sequía coincidió con el principio de la aplicación del Programa de Ajuste Estructural, por lo que el Gobierno tuvo que emplear parte del presupuesto destinado a este programa, en importar productos alimenticios. Alimentos y semillas se distribuyen gratuitamente a la población. La sequía también repercutió desfavorablemente sobre la producción industrial, ya que no se pudieron satisfacer las necesidades de agua y electricidad de la industria. Por todo ello, el Estado ha tenido que hacer frente a un aumento de las necesidades en materia de ayuda social y ha tenido que emplear gran parte de los limitados recursos de que disponía, lo que ha tenido consecuencias negativas sobre los programas de construcción de viviendas y de electrificación de las zonas rurales.

7. El Programa de Ajuste Estructural entra actualmente en su segunda fase, conocida como ZIMPREST (programa de Zimbabwe), para la transformación económica y social. Se trata de una estrategia a corto plazo destinada a impulsar la economía, propiciar las inversiones para crear nuevos empleos, mejorar el nivel de vida y a atenuar la pobreza. Se aplica para la realización de los objetivos a largo plazo del programa oficial Horizonte 2020 y tiene por objetivo encaminar el país hacia el crecimiento sostenible. Zimbabwe espera de este modo acabar con la pobreza y el desempleo y hacer efectivos a nivel nacional, en los umbrales del nuevo siglo, los derechos económicos, sociales y culturales.

8. Para contribuir al cambio de mentalidad, especialmente en lo que concierne a la enseñanza, la igualdad entre los sexos y el desarrollo económico, el Gobierno ha iniciado programas de enseñanza destinados a difundir los derechos sociales y culturales. También se han creado diversos mecanismos para proteger el patrimonio cultural, la producción artística, etc., sin descuidar ninguna categoría cultural.

9. Pese a que el informe presentado ante el Comité es exhaustivo en ciertos aspectos, no subraya suficientemente el contexto histórico en el que Zimbabwe accedió a la independencia. El pasado colonial reciente de Zimbabwe, (1890-1979) explica muchas de sus carencias en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales que se observan en el período actual. Anteriormente, todo se centraba en torno a las necesidades e intereses políticos, económicos, sociales y culturales de los colonos que se conducían como dueños absolutos, y nunca se hacía nada a favor de la mayoría negra del país en las esferas de la educación, la salud, el empleo y el desarrollo sociocultural excepto cuando las necesidades de la minoría blanca en el poder exigían que algunos negros recibiesen una formación útil en el comercio y la industria. El Gobierno de Zimbabwe heredó pues un sistema sociocultural y una infraestructura económica totalmente inadaptados e incapaces de satisfacer las necesidades de la población. Había que reconstruir todo el país y al Gobierno no le quedó más remedio que destinar los escasos recursos

de que disponía a esta tarea, que está decidido a desempeñar de la mejor manera posible. Las observaciones del Comité en la esfera de su competencia le ayudarán a proseguir esta labor de reconstrucción.

10. El PRESIDENTE dice que los miembros del Comité encontrarán respuesta para a las cuestiones 1 a 9 de la lista de cuestiones en la contestación escrita del Estado Parte (págs. 12 a 14) que figura en el informe, publicado en inglés sin signatura.

11. La Sra. BONOAN-DANDAN pregunta qué proporción de niños que asisten a un centro de enseñanza primaria, pero cuyos padres no pueden pagar la contribución mencionada por el representante, necesitan ayuda. Con respecto a la información sobre el Pacto y a su difusión, observa que ninguna organización no gubernamental ha participado en la elaboración del informe, siendo así que algunas de ellas desarrollan una gran actividad en Zimbabwe. ¿Cómo se explica esto? La oradora desearía también conocer más detalles sobre las campañas de información en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales.

12. El Sr. SADI pregunta qué lugar ocupa el Pacto en Zimbabwe. Según sus informaciones, este instrumento no puede invocarse directamente ante los tribunales y, por consiguiente, los derechos que consagra no pueden ser recurridos ante ellos. ¿Es esto cierto? Quisiera saber también hasta qué punto se tienen en cuenta estos derechos a la hora de elaborar la política económica del país, teniendo en cuenta que sigue existiendo grandes disparidades entre ricos y pobres.

13. El Sr. TEXIER pregunta si se han tomado medidas de protección social para contrarrestar los efectos negativos del plan de ajuste estructural sobre las categorías más vulnerables de la sociedad. No cabe duda de que este plan, que se concreta principalmente en privatizaciones, es útil en términos macroeconómicos, pero tiene consecuencias negativas en materia educativa, sanitaria y de alimentación para las categorías más pobres. Por otra parte, según parece, la Constitución de Zimbabwe sólo reconoce a los tribunales competencia en materia de derechos civiles y políticos. En la mayor parte de países determinados derechos económicos, sociales y culturales (como los derechos sindicales y el derecho a la vivienda) pueden ser recurridos ante los tribunales. ¿Cuál es la situación de Zimbabwe a este respecto? Para concluir, ¿qué publicidad piensa dar Zimbabwe a las observaciones finales que aprobará el Comité sobre el informe inicial?

14. El Sr. ADEKUOYE quisiera saber qué medidas ha tomado el Gobierno de Zimbabwe para difundir las disposiciones del Pacto en los medios oficiales y otros medios, y para elevar el nivel de estudios de las mujeres a fin de que puedan contribuir en mayor medida al desarrollo nacional. Quisiera asimismo obtener precisiones sobre las iniciativas que se han tomado a nivel regional para ayudar a Zimbabwe a hacer frente a sus problemas de inflación.

15. El Sr. THAPALIA quisiera obtener informaciones sobre las atribuciones del Tribunal Supremo de Zimbabwe y su lugar en el sistema judicial nacional. Pregunta asimismo si cualquier persona, sin discriminación, puede invocar las

disposiciones del Pacto ante los tribunales. Refiriéndose al artículo 2 de la Constitución, se pregunta por qué no se menciona la discriminación por motivos de sexo.

16. El Sr. GRISSA desea conocer con precisión qué consecuencias ha tenido para el desarrollo económico de Zimbabwe y la capacidad del Gobierno de promover los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, la reciente resolución de los conflictos internos y la recuperación económica registrada en los países vecinos.

17. Teniendo en cuenta el pasado colonial de Zimbabwe, el Sr. RATTRAY pregunta si el Gobierno y la población consideran como tales los derechos consagrados en el Pacto. Cree saber que la vigencia del Pacto depende de su incorporación a la legislación nacional y que sus disposiciones no pueden aplicarse directamente. No obstante, la Constitución garantiza el respeto de los derechos civiles y políticos ante los tribunales. Aunque derechos como el derecho al trabajo, el derecho a fundar sindicatos y el derecho de huelga están previstos por la legislación, pregunta hasta qué punto una posible violación de los mencionados derechos puede ser llevada a los tribunales.

18. El Sr. CEAUSU se congratula de la calidad del informe presentado pero lamenta la ausencia de datos estadísticos en algunas partes. Observa que la respuesta a la cuestión N° 7 indica que el Gobierno de Zimbabwe no ha tomado ninguna medida para informar a la población sobre el Pacto, por lo que quisiera saber si el texto del Pacto se ha publicado en el Boletín Oficial de Zimbabwe, como se hace en otros países.

19. La Sra. JIMENEZ BUTRAGUEÑO desea que se proporcione más información sobre la función y las características de las organizaciones no gubernamentales existentes en Zimbabwe. ¿Hay asociaciones que representen a las mujeres, los ancianos, las minorías, etc.? Añade que la ayuda de las organizaciones no gubernamentales puede ser extremadamente valiosa en un país como Zimbabwe que se enfrenta a problemas de reajuste estructural.

20. El Sr. CHIFAMBA (Zimbabwe) responde a la Sra. Bonoan-Dandan diciendo que debido a imperativos financieros impuestos por el Programa de Ajuste Estructural Económico, se pide una contribución para la escolarización de los niños en la escuela primaria, pero únicamente en las zonas urbanas, y que las familias con pocos ingresos cuentan con una ayuda del Fondo de dimensiones sociales. En las zonas rurales, la enseñanza sigue siendo gratuita. Cabe destacar que el crecimiento económico de los países en desarrollo no depende únicamente de las medidas tomadas por los gobiernos de esos Estados, sino también de muchos factores externos. Además, las instituciones de Bretton Woods, en el marco de sus programas de desarrollo sólo conceden ciertos tipos de financiación, a cambio de condiciones muy estrictas que repercuten negativamente en la esfera social de los países beneficiarios.

21. En lo que respecta a la participación de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración del informe y en la búsqueda de soluciones para los problemas planteados por el programa de ajuste estructural, indica que las organizaciones no gubernamentales no están representadas directamente

y que existe un mecanismo gubernamental para controlar cómo Zimbabwe cumple sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos. En cambio, las organizaciones no gubernamentales ayudan a los grupos vulnerables de la población. El Gobierno insiste en que dichas organizaciones evalúen las necesidades de la población antes de emprender cualquier proyecto para que sus resultados tengan un alcance a largo plazo.

22. En cuanto a la contradicción entre las informaciones presentadas en el informe y las de su exposición preliminar sobre la enseñanza de los derechos humanos, dice que no existe contradicción, y que se trata a su parecer, de una cuestión de presentación. La población zimbabwense es consciente de sus derechos económicos, sociales y culturales, pero también lo es de que el Gobierno no puede garantizar totalmente su realización plena.

23. En respuesta al Sr. Sadi sobre la situación jurídica del Pacto, dice que en la legislación zimbabwense, se toman en consideración algunos de sus elementos, si bien es cierto que el Pacto no ha desempeñado una función esencial en la elaboración de la legislación. Precisa, no obstante, que se revisará progresivamente la legislación nacional para que se tomen en consideración todas las disposiciones del Pacto. Por otra parte, a su juicio el Programa de Ajuste Estructural Económico no tiene totalmente en cuenta los derechos consagrados en el Pacto, porque se trata de un programa concebido más por las instituciones de Bretton Woods que por el Gobierno.

24. Para responder a la pregunta del Sr. Texier, precisa que se han previsto dispositivos de protección social a favor de las víctimas del Programa de Ajuste Estructural (ESAP). Además del Fondo para los aspectos sociales del ESAP, existen programas de formación para que las víctimas de las reducciones de plantilla pueda crear sus propias empresas. No obstante, estos dispositivos siguen siendo insuficientes y Zimbabwe desearía poder contar con la ayuda de la comunidad internacional para remediar este hecho.

25. El Sr. Chifamba precisa que se puede invocar el Pacto ante un tribunal, pero únicamente las secciones que ya se han incorporado en la legislación nacional. En respuesta al Sr. Adekuoye, indica que los funcionarios y los agentes públicos conocen los derechos que figuran en el Pacto. Gracias a un programa del Comité Internacional de la Cruz Roja, todos los soldados zimbabwenses que participan en misiones de mantenimiento de la paz reciben formación general en las esferas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

26. Tomando nota de las preocupaciones del Comité con respecto a los limitados poderes del ombudsman, promete transmitir las a las autoridades competentes. En cuanto a la cuestión de si la cooperación regional ha obstaculizado la aplicación del programa de ajuste estructural, responde que, pese a ciertas dificultades, las relaciones con los países limítrofes han permitido que Zimbabwe aplique satisfactoriamente el Programa de Ajuste. La normalización que se ha producido en Mozambique y en Angola, por ejemplo, ha permitido que hombres de negocios zimbabwenses creen empresas conjuntas, lo que ha estimulado el sector exportador.

27. En respuesta al Sr. Rattray afirma que los principios enunciados por el Pacto son derechos que se reconocen efectivamente. No son únicamente derechos y principios, sino también ideales por los que Zimbabwe luchó en su guerra de liberación. El Gobierno de Zimbabwe piensa aplicarlos, pese a ser consciente de los medios limitados de que dispone para ello. En cuanto al texto del Pacto, se publicó en el Boletín Oficial y se debatió libremente en el Parlamento.

28. El Sr. CEVILLE cree comprender que los derechos que figuran en el Pacto, que son ideales a los que aspira Zimbabwe, deben incorporarse en la legislación nacional antes de poder aplicarse, y que existe una relación entre el nivel de desarrollo económico y la aplicación de los principios del Pacto. A este respecto, quisiera saber qué métodos se emplean para medir la relación entre crecimiento económico nacional y reconocimiento de unos derechos que son universales. Por otra parte, debido a que Zimbabwe se adhirió al Pacto sin formular reservas, se pregunta por qué no se aplican totalmente los derechos contenidos en el Pacto. Refiriéndose al párrafo 12 del informe inicial de Zimbabwe, pide precisiones sobre las circunstancias en las que se admiten limitaciones al goce de los derechos económicos, sociales y culturales.

29. El Sr. ADEKUOYE, vuelve a referirse al Programa de Ajuste Estructural y desea conocer el monto de la ayuda que Zimbabwe ha recibido de distintas fuentes para ejecutar este programa. En cuanto a la cooperación regional, es consciente de las dificultades que se producen en las entidades subregionales pero se pregunta si en las reuniones anuales del Consejo de Ministros los países de la subregión examinan los distintos aspectos de los programas nacionales de ajuste estructural y las medidas que han de tomarse para hacer frente a sus consecuencias.

30. La Sra. JIMENEZ BUTRAGUEÑO recuerda que el Pacto sólo puede entrar en vigor si se ha incorporado en la legislación nacional y pregunta qué derechos se han incluido en las leyes de Zimbabwe y qué medidas concretas se han tomado a este respecto. Por otra parte, quisiera saber cómo coordina el Gobierno sus actividades con las de las organizaciones no gubernamentales. ¿Existe una oficina especial que se ocupe de esta coordinación?

31. El Sr. ANTANOVICH pide precisiones sobre el marco jurídico que se ha creado para proteger los derechos humanos. Quisiera saber qué medios políticos, económicos y sociales ha utilizado Zimbabwe para incorporar en su legislación nacional las medidas de protección que se enuncian en el Pacto, a fin de resolver sus problemas económicos y sociales. Desearía saber asimismo qué reformas prevé Zimbabwe en su legislación nacional para que puedan aplicarse la mayoría de las disposiciones del Pacto.

32. El Sr. CHIFAMBA (Zimbabwe) reconoce que su Gobierno, que no formuló ninguna reserva cuando se adhirió al Pacto, debería poder aplicar todas sus disposiciones. Esta ausencia de reservas pone de manifiesto la determinación de Zimbabwe de respetar el conjunto de las obligaciones que le incumben en virtud del Pacto. No obstante, debido a la escasez de recursos esto se hará progresivamente.

33. En respuesta a una pregunta formulada por el Sr. Adekuoye, el Sr. CHIFAMBA precisa que su país recibió ayuda económica cuando se empezó a aplicar el Programa de Ajuste Estructural, lo que le permitió financiar programas de alimentación, pero que tras el déficit presupuestario registrado como consecuencia de los gastos excepcionales efectuados para luchar contra la sequía de 1991-1992, las instituciones de Bretton Woods se negaron a concederle recursos financieros adicionales. No obstante, se han firmado acuerdos bilaterales con países nórdicos y los fondos que se han obtenido se han dedicado principalmente a proyectos de distribución de agua, saneamiento y lucha contra la pobreza. En cuanto a la cooperación regional, responde que los ministros y los altos funcionarios de los países interesados están debatiendo los problemas que plantean los programas nacionales de ajuste estructural. Señala que estos programas han perjudicado a la cooperación e integración regional, debido especialmente a la dolarización del comercio exterior y al aumento de los costos de transporte que han ocasionado.

34. Cuando se examine la aplicación de cada uno de los artículos del Pacto, indicará cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales que se han incorporado en la legislación nacional. Con respecto a la cooperación entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales, precisa que éstas deben inscribirse en el Ministerio de Agricultura o en el Ministerio de Administración Pública, Trabajo y Asuntos Sociales, y deben informar sobre sus fuentes de financiación, sus intereses y las áreas en las que desean desempeñar sus actividades. Si bien las organizaciones no gubernamentales son libres de llevar a cabo sus proyectos, las autoridades se esfuerzan cada vez más por controlar sus actividades, con vistas a que sean complementarias de los objetivos de desarrollo del Gobierno. Las autoridades alientan asimismo a las organizaciones no gubernamentales a que realicen sus proyectos en colaboración con la población local y a que informen sobre la ejecución de los mismos.

35. En respuesta al Sr. Antanovich, el representante de Zimbabwe dice que el Gobierno intenta reforzar sus medios legislativos y para ello solicita la cooperación internacional, en concreto la ayuda de los organismos de las Naciones Unidas.

36. El PRESIDENTE desea que cuando se debata la aplicación de cada uno de los artículos del Pacto, la delegación zimbabwense responda de manera precisa a las cuestiones que no se han abordado en las respuestas escritas.

37. La Sra. BONOAN-DANDAN comparte la opinión del Presidente y lamenta que la delegación se haya extendido más sobre la grave situación económica y los problemas de desarrollo de Zimbabwe que sobre cuestiones relativas a los derechos humanos. Desearía conocer la situación de las víctimas de la sequía y del programa de ajuste estructural, así como las medidas que ha adoptado el Gobierno a este respecto. Los Estados Partes en el Pacto se han comprometido a proteger a todos los ciudadanos y los derechos económicos, sociales y culturales no son ideales sino derechos.

38. El Sr. CHIFAMBA (Zimbabwe) responde que ha intentado situar las cuestiones relativas a los derechos humanos en el contexto particular de

Zimbabwe. Desea cooperar y promover los derechos humanos. Señala, simplemente, que los derechos económicos, sociales y culturales no son únicamente derechos sino también ideales ya que el Gobierno no dispone de los medios para garantizarlos.

39. El PRESIDENTE dice que es difícil separar los derechos humanos del contexto económico, social y político, razón por la cual el Comité intenta obtener informaciones generales. No obstante, necesita respuestas precisas a las cuestiones formuladas para determinar, en sus observaciones finales, si el Gobierno está tomando medidas para garantizar y promover los derechos que se enuncian en el Pacto.

40. El Sr. SADI observa que el partido que ocupa el poder tiene casi todos los escaños del Parlamento, y pregunta cuáles son los motivos que han impedido al Gobierno instaurar una democracia pluralista, que permita a la población ejercer libremente sus derechos económicos, sociales y culturales. Se pregunta asimismo si el poder judicial es realmente libre e independiente, dado que los jueces son nombrados por el Presidente tras consultas con la Comisión Judicial. En cuanto a la discriminación por razón de sexo, toma nota de las medidas legislativas importantes que se han adoptado para garantizar la igualdad de hombres y mujeres, pero le preocupa el carácter discriminatorio del derecho consuetudinario. Desea saber si las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación.

41. El Sr. ADEKUOYE pregunta cuál es la situación de la población en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas, especialmente en cuanto a la discriminación. Señala que la legislación que se ha aprobado sobre los derechos de las personas con discapacidades es muy generosa, pero que los mismos poderes públicos no respetan determinadas disposiciones. Además, el Consejo creado en 1992 para defender los intereses de las personas con discapacidades sólo se ha reunido dos veces antes de que el Ministerio de Administración Pública, Trabajo y Asuntos Sociales recortara su presupuesto. Quisiera saber los motivos de este hecho.

42. La Sra. JIMENEZ BUTRAGUEÑO desea obtener precisiones sobre la situación actual de las mujeres y saber si gozan de los mismos derechos que los hombres dentro de la familia y en materia de acceso al trabajo, al crédito y a la vivienda, así como en el ámbito penal.

43. El Sr. ANTANOVICH pide aclaraciones sobre los párrafos 10 y 12 del informe (E/1990/5/Add.28).

44. El Sr. ADEKUOYE quisiera saber si se ha aprobado una ley de sucesiones basada en el Libro Blanco elaborado por el Gobierno y las organizaciones que defienden los derechos de la mujer, y si es así, hasta qué punto sus disposiciones corrigen las prácticas discriminatorias del derecho consuetudinario.

45. El Sr. THAPALIA pide precisiones sobre la discriminación de hecho de que son víctimas las mujeres y desea saber en qué medida el Gobierno zimbabwense está decidido a asegurar la igualdad de hecho y de derecho entre hombres y

mujeres en las esferas económica, social y cultural (respuestas escritas a la lista de cuestiones, párrafo 12). Desearía saber asimismo si las personas desfavorecidas pueden beneficiarse de la ayuda judicial por motivos de discriminación o de desigualdad.

46. El Sr. RIEDEL felicita a la delegación por la calidad de las respuestas escritas relativas a la aplicación del artículo 2 del Pacto. No obstante, desea que se proporcionen informaciones concretas sobre las campañas de lucha contra la discriminación que se llevan a cabo entre la población y saber si se procede a un seguimiento para evaluar los resultados.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.